

Boletín



Oficial

DE LA PROVINCIA

DE BALEARES

Se publica los martes, jueves y sábados

Se suscribe en la *Escuela-Tipográfica*, calle Misericordia núm. 4. Los suscriptores tienen derecho además de los números ordinarios a los extraordinarios, excepto los que contengan las listas electorales rectificadas que podrán adquirir con un 25 por 100 de rebaja sobre el precio de venta.

Precios.—Por suscripción al mes 3 pesetas.—Por un número suelto 0'50.—Atrasado 0'75.—Anuncios para suscriptores, palabra 0'03.—Id. para los que no lo son 0'05.

NUM.
9885

Las leyes obligarán en la Península, Islas adyacentes, Canarias y territorios de África sujetos a la legislación peninsular, a los 20 días de la promulgación, si en ella no se dispusiera otra cosa. Se entiende hecha su promulgación el día en que termine la inserción de la Ley en la *Gaceta*.

Las leyes, órdenes y anuncios que se manden publicar en los BOLETINES OFICIALES se han de remitir al Gobernador civil y por cuyo conducto se pasarán a los editores de los mencionados periódicos (*R. O. de 6 Abril de 1839*).

SECCION DE LA GACETA

PARTE OFICIAL

S. M. el Rey Don Alfonso XIII (q. D. g.), S. M. la REINA Doña Victoria Eugenia, S. A. R. el Príncipe de Asturias e Infantess y demás personas de la Angusta Real Familia, continúan sin novedad en su importante salud.

(*Gaceta 16 y 17 Abril de 1930*)

PRESIDENCIA DEL CONSEJO
DE MINISTROS

EXPOSICIÓN

SEÑOR: Ha sido y es firme propósito de este Gobierno para llevar a cabo la finalidad que se ha impuesto como misión primordial, el adoptar todas aquellas medidas que, sin implicar menoscabo del principio de autoridad, se estiman encauzadoras de las actividades nacionales en el sentido de borrar diferencias y recelos de creados al amparo y en la aplicación de preceptos que circunstancias especiales y de todos conocidas pudieron hacer necesarios.

La exacerbación de determinadas tendencias en algunas regiones del territorio patrio ha dado lugar a procedimientos y condenas cuya justicia y legalidad no cabe siquiera discutir; pero deseoso el Gobierno de llegar a una sincera y real pacificación de espíritus que, fundiendo a todos en un solo ideal, permita una colaboración leal y efectiva, sin suspicacias, prevenciones ni rencores, y en la seguridad de que interpreta los elevados sentimientos de V. M. siempre propicios a la aplicación de la Regia prerrogativa de perdón, propone su ejercicio para aquellos hechos, ya sancionados o enjuiciados en las oportunas causas que se relacionen con las expresadas tendencias y disposiciones.

En atención a las consideraciones expuestas, el Presidente que suscribe, de acuerdo con el Consejo de Ministros, tiene el honor de someter a la sanción de V. M. el siguiente proyecto de Decreto.

Madrid 14 de abril de 1930.

SEÑOR:

A L. R. P. de V. M.,
Dámaso Berenguer Fusté

REAL DECRETO

Núm. 1095

A propuesta del Presidente de Mi Consejo de Ministros y de acuerdo con éste, Vengo en decretar lo siguiente.

Artículo 1.º Concedo indulto total de las penas que en el día de la publicación de este Decreto hubieran sido impuestas por cualquiera jurisdicción o Tribunal a todos los condenados por los delitos siguientes:

A) Delitos comprendidos en el Real decreto de 18 de septiembre de 1923.

B) Los previstos y sancionados en la Ley de 23 de marzo de 1906 y artículos 230 y 231 del Código penal vigente.

C) Los desórdenes públicos definidos y penados en el capítulo VI del título III del libro II del Código Penal de 1870 y en

el capítulo IV, título III del Libro II del vigente Código Penal.

D) Los penados en los artículos 255 y 256 del Código de Justicia militar, excepto el caso en que los autores sean militares.

E) Los comprendidos en el artículo 3.º del Real decreto de 13 de abril de 1924 y artículos 542 del Código Penal vigente.

F) Los de quebrantamiento de condena impuesta por cualquiera de los delitos comprendidos en este artículo.

Artículo 2.º En todas las causas por delitos comprendidos en el artículo 1.º que hayan sido cometidos hasta el día de la publicación de este Decreto en la *Gaceta de Madrid* se acordará el sobreseimiento libre y definitivo y el Ministerio Fiscal desistirá de las acciones que en dichas causas ejercite.

Artículo 3.º Las personas que por virtud de los procedimientos a que se refieren los artículos anteriores estén detenidas, presas o extinguiendo condena serán puestas inmediatamente en libertad si no estuvieren privadas de ella por otra causa, y las que se hallen fuera del territorio español podrán volver a él, debiendo sobreseerse libremente los procesos, cualquiera que sea la situación en que se encuentren los sujetos por ellos a responsabilidad criminal, salvo la civil, que se reclame a instancia de parte legítima.

Artículo 4.º Los Ministerios respectivos quedan autorizados para dictar las disposiciones que se estimen necesarias para la aplicación del presente Decreto, del que en su día se dará cuenta a las Cortes.

Dado en Palacio a catorce de abril de mil novecientos treinta.

ALFONSO

El Presidente del Consejo de Ministros,

Dámaso Berenguer Fusté

(*Gaceta 15 abril de 1930*)

MINISTERIO DE JUSTICIA Y CULTO

EXPOSICIÓN

SEÑOR: El artículo 4.º del Real decreto de 29 de noviembre de 1920 concedió derecho a los Secretarios de Juzgados municipales de capital de provincia o población de censo de más de 30.000 almas a ser declarados excedentes a su instancia, reuniendo determinadas condiciones y solicitándolo de los Presidentes de las Audiencias territoriales. Al amparo de esa disposición, varios Secretarios de Juzgados municipales que servían en poblaciones de las condiciones antes mencionadas, obtuvieron la excedencia de sus cargos, con propósito, sin duda, de volver al Secretariado una vez que hubiesen cesado los motivos que les obligaron a pedir la excedencia. Pero dictado el Real decreto de 31 de marzo de 1924, sin duda con olvido de que pudiera haber Secretarios de Juzgados municipales excedentes de la categoría consignada en el artículo 4.º del primero de los citados Reales decretos, vacante en su artículo único que todas las vacantes de Secretarías de los Juzgados municipales de capitales de provincia y poblaciones de más de 30.000 almas, aunque estuvieran anunciadas a concurso, y las que de la misma clase ocurran en lo sucesivo, se provean por oposición, creando de este modo una situación anómala a Secretarios de Juzgados municipi-

pales que obtuvieron su excedencia a virtud de una disposición legal, pues si por una parte esa excedencia, expresamente no derogada, les concede derecho a reintegrarse en los cargos de su categoría, la disposición del Real decreto de 31 de marzo de 1924 les impide volver a ser nombrados para determinadas Secretarías si antes no se sujetan a nueva oposición. A remediar este estado tiende el adjunto proyecto de Real decreto, concediendo derecho a solicitar y a ser preferidos para ser nombrados en las vacantes de Secretarios de Juzgados municipales de igual categoría que la que servían cuando fueron declarados excedentes.

Fundado en las anteriores consideraciones, el Ministro que suscribe tiene el honor de someter a la aprobación de V. M. el adjunto proyecto de Decreto.

Madrid, 14 de abril de 1930.

SEÑOR:

A L. R. P. de V. M.
José Estrada y Estrada

REAL DECRETO

Núm. 1.101

A propuesta del Ministro de Justicia y Culto y de conformidad con el parecer de Mi Consejo de Ministros,

Vengo en decretar lo siguiente:

Artículo único. Los Secretarios de Juzgados municipales de capital de provincia o poblaciones de censo de más de 30.000 almas, que al amparo de lo prevenido en el artículo 4.º del Real decreto de 29 de noviembre de 1920 hubieran obtenido a su instancia la excedencia de sus cargos, podrán solicitar y serán preferidos para ser nombrados en las vacantes de Secretarios de Juzgados municipales de igual categoría a la que servían cuando fueron declarados excedentes, siempre que esa solicitud la formulen antes de ser anunciada a oposición. Si nombrados para la vacante solicitada no se posesionasen en el plazo legal y no justificasen la imposibilidad de hacerlo, se entenderá que renuncian a su derecho como excedentes.

Dado en Palacio a catorce de abril de mil novecientos treinta.

ALFONSO

El Ministro de Justicia y Culto,

José Estrada y Estrada.

(*Gaceta 15 abril de 1930*)

MINISTERIO DE ECONOMÍA

NACIONAL

EXPOSICIÓN

SEÑOR: La necesidad de acudir eficazmente en defensa de la producción de la seda natural y contener la aguda crisis de esta riqueza tan genuinamente española, empleando medidas de Gobierno que no podían atribuirse a la Comisaría de la Seda, motivó la publicación del Real decreto-ley número 1.107, de 18 de abril de 1929, que garantizaba un precio remunerador al productor de capullo.

Se alcanzaba esta garantía con la fijación de un precio mínimo, determinado por la Oficina Central Sadera, y entregado a los cosecheros por mediación de las Cooperativas previstas en el citado Real decreto.

Dificultades surgidas al organizar las

Cooperativas impiden que se efectúe la venta del capullo en las condiciones preceptuadas, haciéndose por ello necesario un régimen provisional, en tanto aquellas se constituyan, que regule la adquisición de capullos y el pago de un precio remunerador al productor.

Por otra parte, la experiencia ha mostrado la conveniencia de facilitar a la iniciativa privada la constitución de Cooperativas, ampliando en este sentido los preceptos de aquella Soberana disposición.

Fundado en estas consideraciones, el Ministro que suscribe, de acuerdo con el Consejo de Ministros, tiene la honra de proponer a la aprobación de V. M. el adjunto proyecto de Decreto, en el cual se han tenido en cuenta los intereses legítimos de cuantos factores intervienen en la compra del capullo de seda, defendiendo los de los cosecheros, en el que se prevé la situación en que quedarían las hilaturas si en el año actual no se lleva a efecto la revisión arencelaria y se otorgan facilidades para la constitución de Cooperativas de producción y venta.

Madrid, 11 de abril de 1930.

SEÑOR:

A L. R. P. de V. M.
Julio Wais y San Martín

REAL DECRETO

Núm. 1094

A propuesta del Ministro de Economía Nacional y de acuerdo con Mi Consejo de Ministros,

Vengo en decretar lo siguiente:

Artículo 1.º Durante el año actual, las hilaturas, Asociaciones agrícolas y particulares adquirirán el capullo fresco de seda directamente de los productores al precio mínimo que señalará la Oficina Central Sadera antes del día 10 de mayo venidero.

El Estado por mediación de la Oficina Central Sadera, y con cargo a los recursos de ésta, en el mes de septiembre abonará al cosechero la prima de una peseta por kilogramo de capullo fresco, siempre que el precio mínimo fijado por la Oficina Central Sadera no rebase el de 4,50 pesetas. Si el precio mínimo rebasa este límite, la prima quedará reducida en el exceso. Para el abono de la prima se seguirá el mismo procedimiento que señaló el Reglamento de 7 de mayo de 1915, y los talones de los pesos entregados a los cosecheros serán intransferibles.

El beneficio de la prima se aplicará asimismo al capullo que no se venda en fresco, siempre que se lleve por los cosecheros a los establecimientos oficiales o a los ahogaderos públicos intervenidos por el Servicio agrónomo, para proceder a su ahogado.

Artículo 2.º Los hilaturas, Asociaciones agrícolas y particulares que adquieran el capullo directamente del productor acudirán a los respectivos Servicios agrónomos solicitando la designación de interventores en las compras y señalando la fecha en la que darán comienzo a sus operaciones. El Servicio será autorizado por la Oficina Central Sadera.

Artículo 3.º Es condición indispensable para que el productor reciba los be-

